

La importancia del Movimiento Feminista en la ampliación del Estado del Bienestar

Inés Campillo Poza (Socióloga)



En los últimos meses se ha repetido incesantemente que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal apuntalará el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar español, el que se refiere a los servicios sociales de atención a los y las dependientes. Este pilar ha tendido a ser el más endeble en la mayoría de Estados del Bienestar occidentales, no sólo en España. El principal motivo de la debilidad, o incluso inexistencia, de ese cuarto pilar reside en el proceso mismo de consolidación histórica de los Estados del Bienestar. Sin embargo, es importante señalar que la problematización de la dependencia y el impulso estatal de los servicios sociales en cada país ha sido posible gracias a la labor de los movimientos feministas. El caso español es un ejemplo de ello.

Pese a ser esa configuración estatal que adoptaron las sociedades capitalistas occidentales en los años posteriores a 1945, el Estado del Bienestar (EB) hunde sus raíces en el siglo XIX. Durante ese siglo, el desarrollo del capitalismo industrial, la creación de los mercados de trabajo nacionales y el éxodo rural enfrentaron a los Estados a la “cuestión social”. Esta expresión alude no sólo a la situación de pobreza e insalubridad en la que vivía la nueva clase de asalariados urbanos, sino que se refiere también a la amenaza que la proliferación de las organizaciones obreras suponía para los regímenes establecidos. Las revoluciones europeas de 1848 y, ante todo, la Comuna parisina de 1871, hicieron que las clases gobernantes se dieran cuenta de que era necesario realizar auténticas innovaciones institucionales, de ahí la legislación social que empezó a ponerse en marcha en toda Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Y es que ante la reivindicación obrera del sufragio universal (masculino) y la amenaza de un eventual gobierno popular, esa legislación fue concebida por las clases gobernantes como una concesión menor para aplacar la cuestión social.

El origen histórico de los diversos EB estuvo ligado, pues, al conflicto entre las

Los derechos sociales no eran completamente universales, sino que habían sido concebidos como derechos básicos para todos los trabajadores varones cabezas de familia de una nación.

clases gobernantes y el movimiento obrero en torno a los derechos asociados al trabajo asalariado y al estatuto político de éste. Esto es importante porque el conflicto laboral no selló únicamente la génesis de los EB, sino que marcó su proceso mismo de consolidación. Las décadas de posguerra fueron la “Época dorada” del capitalismo del bienestar (1945-1975), pero también del trabajo asalariado. En primer lugar, los modernos sistemas de servicios públicos y de seguridad social fundaron los derechos sociales de ciudadanía, que garantizaban una malla de seguridad y el mantenimiento de la renta fundamentalmente a todos los asalariados que ocasionalmente se encontraran en una situación extralaboral, lo que ocurría en caso de enfermedad, accidente, desempleo o jubilación. En segundo lugar, en esas décadas creció la fuerza electoral de los partidos obreros y se consolidaron también los sindicatos obreros, que se convirtieron en sujetos clave de los sistemas de relaciones industriales y de la negociación en torno a la planificación económica nacional. Por último, la viabilidad económica y política de los EB de posguerra dependía de su compromiso firme con el pleno empleo. Este compromiso no sólo aseguraba la financiación, a través de las cotizaciones o los impuestos sobre las rentas, de los servicios públicos y la seguridad social, sino que pretendía reducir al mínimo la población eventualmente destinataria de esos servicios.

De esta forma, el conflicto laboral marcó el origen, el carácter y las conquistas sociales asociadas a los EB, pero estableció también sus límites. Los derechos sociales no eran completamente universales, sino que habían sido concebidos como derechos básicos para todos los trabajadores varones cabezas de familia de una nación. De hecho, así habían sido defendidos por el movimiento obrero, que había respaldado el “salario familiar” y desincentivado la participación femenina en el mercado de trabajo. Los varones eran entonces los ciudadanos por excelencia. Las mujeres, sin embargo, incluso aunque trabajaran, no accedían a los mismos derechos que los varones. La legislación fiscal y de se-

guridad social presuponian –a la vez que promovían– que las mujeres permanecían en el hogar, cuidando de sus familias, y les garantizaba unos beneficios sociales derivados de las contribuciones y derechos de sus maridos. Así pues, las mujeres debían contentarse con acceder a la ciudadanía de forma indirecta y dependiente, debían aceptar una ciudadanía de segunda.

Por lo tanto, podemos decir que el EB consolidó sus programas básicos –los tres pilares del sistema educativo, sanitario y de seguros de desempleo y pensiones–, contando con una determinada estructura familiar: la familia tradicional en la que el varón trabajaba, ganaba un salario familiar y gozaba de ciertos derechos extensibles a sus “dependientes”, mientras que la mujer permanecía en el hogar, cuidando de sus hijos y familiares ancianos.

Durante los años sesenta y setenta, sin embargo, ciertas transformaciones pusieron de manifiesto el sesgo patriarcal de los principales programas de los EB. En primer lugar, en la mayoría de países –no así en la España franquista– el acceso de las mujeres a la educación superior, el crecimiento económico, la escasez de mano de obra y las propias aspiraciones de las mujeres facilitaron el acceso masivo de éstas al mercado de trabajo. Este acceso evidenció las diferencias en términos de derechos sociales que existían entre hombres y mujeres, diferencias que además empezaron a ser denunciadas por los emergentes movimientos feministas. Ellos no sólo reivindicaron la independencia económica, social y ciudadana de las mujeres, sino que cuestionaron también el criterio mismo de dependencia. Muchas mujeres dependían económicamente de sus maridos, pero éste no era el único tipo de dependencia. Los varones podían dedicarse a la esfera pública del trabajo y la política porque el trabajo de las mujeres en el hogar les liberaba para hacerlo; es decir, los varones podían ser independientes porque dependían del trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres. El propio EB se había levantado sobre el supuesto de este trabajo naturalizado de las mujeres. Sin embargo, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y la labor de los movimientos feministas sacaron a la luz estas dependencias o interdependencias que habían sido ocultadas y despreciadas por los EB.

De este modo, los EB se vieron obligados a asumir determinadas cargas asistenciales familiares o, dicho de otra forma, a construir sus cuartos pilares. Durante los años sesenta y setenta, sólo los EB nórdicos abandonaron efectivamente la ideología



Las mujeres, sin embargo, incluso aunque trabajaran, no accedían a los mismos derechos que los varones.

de la familia tradicional, reformando sus sistemas fiscales y sus mercados de trabajo, y expandiendo su sistema público de servicios sociales (guarderías, centros de día, etc.); sin embargo, en todos los países se oyeron reivindicaciones similares que alterarían las agendas políticas y provocarían ciertas reformas irreversibles en los programas de bienestar. Veamos, por ejemplo, el caso español.

Debido al régimen dictatorial, en España el EB no pudo consolidarse hasta los años ochenta, en plena recesión económica, justo cuando otros países sufrían recortes en sus programas de bienestar. Desde entonces se han desarrollado principalmente los tres pilares tradicionales del EB: la educación, la sanidad y las pensiones. La ideología católica y familiarista se impuso a la hora de seguir asignando a las mujeres el trabajo de cuidados y por eso no se planteó ningún cuarto pilar. Los servicios sociales se entendían como algo residual, cuya responsabilidad recaía en las comunidades autónomas. En este contexto, el movimiento feminista se opuso a la ideología familiarista y reivindicó el reparto del trabajo doméstico y la expansión de guarderías públicas, pero durante aquellos años sus esfuerzos hubieron de concentrarse en demandas más básicas: la garantía de derechos civiles y políticos iguales para las mujeres, el derecho al divorcio y la despenalización del aborto. Sin embargo, es evidente que desde entonces la difusión de los servicios sociales de atención a los y las dependientes ha estado en la agenda del movimiento social feminista, cuyas reivindicaciones se han ido introduciendo en sindicatos y partidos políticos de izquierda.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal no constituye el cuarto pilar del EB, como han dicho algunos, sino que es sólo una de las partes de ese pilar. El campo de expansión de los servicios sociales de atención a los y las dependientes desborda el marco de esta ley, dirigida principalmente a ancianos, enfermos y discapacitados. Aún es necesario que las dependencias e interdependencias sean reconocidas políticamente de forma sustancial y ambiciosa, tal y como han defendido históricamente los movimientos feministas.